

DE CANNING LECTURE- Londres, 13 de abril del 2000

Me siento muy honrado al haber sido invitado a pronunciar en los albores del nuevo siglo la *Canning Lecture*, confiada en anteriores etapas a personalidades destacadas de las artes y de la ciencia. La sola mención de dos grandes hispanoamericanos, como Salvador de Madariaga y Jorge Luis Borges, demuestra con elocuencia el alto nivel académico de quienes me precedieron en esta cátedra.

Canning House ha sido desde hace 60 años el espacio natural que ha dado albergue a las manifestaciones de amistad entre el Reino Unido y las comunidades ibérica e iberoamericana en la Gran Bretaña.

Me llena de orgullo el que mi país haya tenido una política especial de acercamiento y apoyo a Canning House, traducida en realidades materiales y tangibles. El Salón Colombia, actualmente en funcionamiento en las instalaciones de Belgravia, es un símbolo de esa especial relación.

Es también bastante significativo para mí, como Presidente latinoamericano, el que esta Institución lleve al nombre de George Canning, quien tanto hiciera por el surgimiento de

nuestras naciones en el concierto de las sociedades libres y democráticas en las primeras décadas del siglo XIX.

El interés de Canning por fortalecer los lazos entre las nacientes repúblicas americanas y el Reino Unido se asemejaba al del Libertador Simón Bolívar, quien señaló en carta dirigida a Antonio José de Sucre que “una alianza con Inglaterra significaría políticamente más para nosotros que la batalla de Ayacucho”.

Aunque con distintos intereses, además del fomento de las relaciones mutuas, ambos, Canning y Bolívar, buscaban una política contraria al absolutismo, inspirada en las libertades civiles y abierta al comercio y a la internacionalización de la economía.

Y es en esa misma visión donde todavía Gran Bretaña y Colombia encuentran un terreno común.

Cuando se pisa suelo británico, la historia, con todo su peso de drama y evolución, se hace patente ante nuestros ojos. Desde los comienzos de la democracia representativa en el siglo XIII hasta nuestros días, Gran Bretaña es el ejemplo vivo

de que la construcción de una sociedad civilizada no se hace de la noche a la mañana; que su desarrollo no es el milagro de un día, sino la suma de muchas crisis: de momentos de apogeo y depresión, y de las oscilaciones entre períodos de paz y de confrontación. ¡Cuántas lecciones de coraje y sapiencia le ha dado al mundo la historia del Reino Unido!

Colombia, como muchas otras naciones del mundo contemporáneo, tiene una larga y compleja historia, llena de éxitos, pero también de fracasos; con muchas cosas aún por hacer pero con sus propios valores, su propia cultura política y sus propias instituciones, forjadas en medio de dificultades y obstáculos como quizás ningún otro país de Latinoamérica. Como cualquier otra nación, Colombia ha vivido largos períodos de paz en los cuales ha sembrado las bases de su desarrollo; pero a esos años han sobrevenido otros de confrontación violenta que han amenazado con destruirlas. Sin embargo, y pese a lo duro de las confrontaciones, los colombianos seguimos trabajando por un futuro mejor, con la confianza que nos dan nuestras instituciones y el conocimiento de un pasado que ha sido testigo más de una vez de la grandeza de nuestras gentes.

En mi país, por fortuna, la práctica de la democracia, las elecciones libres, el respeto a las libertades fundamentales, la promoción de los derechos humanos, incluyendo en éstos los derechos de contenido social y económico, así como los llamados derechos de tercera generación, sigue siendo característica esencial de nuestro sistema político.

A veces se olvida que Colombia ha construido pacientemente una institucionalidad respetable, que ha resistido durante los últimos lustros el embate feroz de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, que no se ha alejado de la democracia, que la legitimidad del gobierno es indiscutible, y que su clase dirigente ha hecho esfuerzos para abrir a todos los sectores de la sociedad el esquema político.

Colombia ha sido y sigue siendo un baluarte de democracia, estabilidad política y estabilidad económica en América Latina.

En cuanto al desarrollo de nuestras instituciones políticas, Colombia es una sólida democracia constitucional, con una rica historia electoral y una gran estabilidad institucional durante sus casi doscientos años de vida republicana. Como toda democracia, ha tenido y tiene imperfecciones. Pero

siempre hemos tenido la voluntad de ir superándolas, sin transitar las vías del autoritarismo. El gobierno que me honro en presidir fue elegido en unos comicios electorales, cuya transparencia nadie ha puesto en duda, con la mayor votación de la historia y recibió el poder de su antecesor, integrante del partido contrario, sin traumatismos ni contratiempos. Las ramas del poder público funcionan en forma separada y autónoma y los órganos de control cumplen sus labores en total independencia.

El manejo de la economía colombiana, por otra parte, -tal como lo han reconocido los más rigurosos analistas extranjeros-, ha sido señalado como prudente y ortodoxo, lo cual nos ha permitido sortear con éxito coyunturas que han sido críticas para otras economías de la región. En ese contexto, la recesión que padecimos el año anterior es una desafortunada excepción.

Por estos días Colombia vive ciertamente circunstancias que nos están poniendo a prueba como nación, pero de las cuales estamos seguros que saldremos adelante con renovados bríos, como ya lo hemos hecho en el pasado.

El legado histórico de nuestras generaciones pasadas, que constituye nuestro más valioso activo, se ha visto amenazado en las dos últimas décadas por la aparición en nuestra vida nacional del fenómeno del narcotráfico.

Éste, con los inmensos recursos económicos que genera, ha sido el principal catalizador de la violencia en el país; ha distribuido grandes sumas de dinero en diferentes sectores sociales, alimentando intensos ciclos de corrupción; ha desplazado con cultivos ilícitos la tradicional geografía agrícola de nuestro país, así como impulsado la colonización de nuevos territorios para su expansión. En esas zonas, y por la razón misma de ser una actividad ilícita, el narcotráfico se desenvuelve en medio de una dramática violencia con altos costos sociales, que lo convierten en un generador de conflictos y de pobreza.

Colombia, sin embargo, pese a que no ha contado con los suficientes recursos para enfrentar tal amenaza, jamás ha claudicado ante ella. Por el contrario, sacrificando buena parte de sus mejores hombres y mujeres, y desviando importantes sumas de dinero que bien pudieran haberse invertido en desarrollo social, el país ha asumido con entereza y valentía la

parte que le corresponde frente a un delito que tiene una naturaleza claramente internacional.

Pero mientras logramos que las cargas para enfrentar este delito se distribuyan en forma equitativa, Colombia tiene que seguir su camino histórico de construcción de un Estado social de Derecho que nos permita insertarnos positivamente en el mundo globalizado de este siglo XXI.

Y es sobre ese objetivo que mi gobierno ha venido trabajando incansablemente, asumiendo con valentía todos y cada uno de los retos que los actuales momentos nos han impuesto. No hay problema que no estemos enfrentando, no sólo con decisión, sino ante todo con perspectiva de largo plazo, construyendo el futuro en medio de no pocas incomprendiones y sacrificios.

Desde el primer día de mi gobierno anuncié que le daríamos un profundo cambio al rumbo que traía el país y que ello lo haríamos respetando en todo momento nuestras instituciones democráticas y constitucionales. Mi decisión se fundaba en que Colombia venía acumulando unos problemas cuya solución no podía continuar aplazándose con fórmulas

simplistas, y los empezamos a enfrentar conociendo de antemano los costos políticos de impopularidad que ello acarrea. Por tratarse de problemas alimentados en medio de una compleja trama de procesos históricos, no hemos prometido milagros sino trabajo serio y responsable, audacia para buscar salidas creativas, tenacidad para enfrentar las adversidades y valor para aplicar los correctivos, por dolorosos que ellos sean.

Identificamos como los grandes problemas que nos aquejan la violencia, la corrupción, la pobreza generada por el desempleo, el desequilibrio del gasto público y el debilitamiento del Estado. Ante todos ellos hemos venido actuando sin vacilaciones y hoy los resultados se comienzan a sentir en forma positiva.

Colombia viene soportando desde hace cuatro décadas el costo social de un conflicto armado que desangra nuestro país y que en buena parte es financiado por los dineros del narcotráfico. Superar este conflicto mediante la negociación y el diálogo es un reto que mi gobierno ha asumido en cumplimiento del mandato que le otorgaron millones de colombianos.

Pero debo ser claro, porque frecuentemente hay mucha confusión en la comunidad internacional sobre la verdadera dimensión de este conflicto. En Colombia no hay una guerra civil. Una guerra civil se da cuando los hijos de una misma nación se enfrentan entre sí en bandos que agrupan grandes proporciones de sus habitantes. Pero este no es el caso de Colombia. Nosotros somos un país con cerca de 40 millones de habitantes, donde los actores armados al margen de la ley, tanto guerrilleros como paramilitares, no llegan siquiera a 35.000 miembros, o sea, menos de una milésima parte de la población, con un apoyo popular que no alcanza ni al 3% de los colombianos.

En Colombia, la inmensa mayoría queremos la paz y no la confrontación, y en ese propósito estoy comprometido. Hoy puedo decir que hemos avanzado en año y medio lo que fue impensable durante muchos años. Con las FARC, el grupo guerrillero más grande y antiguo del país, hemos iniciado un proceso de negociación, con una agenda y unos procedimientos definidos, que avanza a paso reposado pero seguro, con el concurso y la participación de todos los estamentos de la nación. No más el pasado domingo se inició

un proceso de audiencias públicas, en el que las fuerzas vivas de Colombia empezaron a exponer, ante un Comité Temático compuesto por miembros de las instituciones colombianas y de la guerrilla, sus fórmulas para avanzar en materia de empleo y reactivación económica, con miras a su próxima discusión en la Mesa de Negociaciones. Y con el grupo insurgente ELN estamos también sosteniendo diálogos con el objetivo de empezar pronto una negociación.

Recientemente los negociadores de las FARC y los del gobierno estuvieron visitando algunos países europeos con el ánimo de conocer la experiencia de diferentes modelos económicos, y de poder discutir algunos temas propios del mundo del nuevo milenio. En particular se habló del imperativo moral de humanizar el conflicto mediante el respeto por parte de la guerrilla de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Mi Gobierno está comprometido a fondo con la aplicación de unas normas mínimas de humanidad que alivien, siquiera parcialmente, el sufrimiento causado por el conflicto interno a sus víctimas y a la población civil.

En este sentido, hemos incorporado a nuestra legislación interna la Convención de Ottawa para la Prohibición y

Destrucción de las Minas Antipersonales. Asimismo, exoneramos de la prestación del servicio militar a los menores de 18 años de edad, yendo más allá de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

Hemos decidido adelantar los diálogos en medio de la confrontación, pero esperamos hechos de paz. Entretanto, seguiremos cumpliendo con el deber constitucional de salvaguardar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos, para lo cual estamos fortaleciendo la eficiencia de las Fuerzas Armadas en un marco de respeto a los derechos humanos.

También estamos trabajando por lograr una Colombia de manos limpias. En la lucha contra la corrupción venimos desarrollando una comprensiva estrategia que combina las acciones represivas con las preventivas. Las primeras las realizamos en forma coordinada con los órganos estatales de control y con la participación de la ciudadanía. Esta coordinación, ensayada por primera vez en muchos años, no sólo ha arrojado excelentes resultados sino, lo que es más importante aún, le ha devuelto la confianza a los ciudadanos en la capacidad del Estado para combatir la corrupción. También, por medio de audiencias públicas el ciudadano

común y corriente tiene la oportunidad de denunciar a los corruptos ante aquellos organismos y éstos se comprometen a tener respuestas prontas. Así ha sido posible adelantar muchas investigaciones que han terminado con la detención y destitución de muchos funcionarios públicos implicados en actos de corrupción.

Además, atendiendo el clamor del pueblo y la urgente necesidad de reformar y moralizar las costumbres políticas en Colombia, modernizar los partidos, combatir la corrupción en todas las instancias del servicio público y hacer más representativo y transparente el Congreso Nacional así como otros órganos colegiados, mi gobierno ha convocado un referendo para los próximos meses.

Mediante este mecanismo democrático, consagrado en nuestra Constitución, será el mismo pueblo colombiano quien decida qué cambios quiere hacer en las instituciones políticas del país y cuándo quiere que se implementen.

Estamos seguros de que las propuestas del referendo tendrán una amplia aprobación, lo cual nos despejará el camino para continuar nuestra tarea de modernización del Estado. Como

es tradición en nuestro país, siempre fiel al gobierno de las leyes, que son las mejores garantes de la estabilidad política y económica, esta gran reforma política la estamos realizando de acuerdo con los preceptos y procedimientos que establece nuestra Constitución Nacional. En Colombia no prosperan los actos arbitrarios, sino la sensatez y la seguridad del camino institucional.

También trabajamos en recuperar nuestra economía. Para ello hemos tomado drásticas medidas de ajuste fiscal y de racionalización de la administración pública, con miras a reducir en los próximos años el déficit del Estado central. En las próximas semanas el Congreso abocará el estudio de otras medidas necesarias para sanear las finanzas públicas y dinamizar la producción industrial. En la preparación de los presupuestos del Estado hemos sido responsables y austeros. Estamos aplicando una estricta disciplina fiscal, convencidos de que al hacerlo se propicia un escenario más apropiado para el sano desarrollo de los negocios privados. Este conjunto de medidas persiguen que el crecimiento económico del país en adelante se haga sobre bases sólidas y no sobre bases ilusorias que se desvanezcan a la primera crisis.

Es satisfactorio constatar que las medidas adoptadas ya han empezado a mostrar sus bondades y que el panorama económico del país es prometedor. Las tasas de interés son hoy menos de la mitad de lo que eran hace más de un año, la inflación reporta los índices más bajos en tres décadas, el déficit de las cuentas externas se ha reducido sustancialmente y los organismos multilaterales, al renovarles su confianza al país, han despejado el panorama cambiario.

El sector productivo por su parte, muestra cada vez más signos claros de recuperación y todo indica que estamos iniciando nuevamente un proceso sostenido de crecimiento.

Todas estas acciones de búsqueda de la paz, de transparencia y eficiencia en la administración estatal, fiscales y económicas, buscan en últimas el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado como prerequisite básico e inaplazable para que el país se inserte positivamente en este mundo de la globalización.

Y es dentro de esa perspectiva que se inscribe el Plan Colombia que hemos presentado a la comunidad internacional de naciones. Un Plan con el cual nuestro país enfrenta el reto

de recuperar las responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, la generación de condiciones para el empleo, el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la lucha contra el narcotráfico.

Las estrategias que componen el Plan Colombia constituyen el más ambicioso esfuerzo que podemos adelantar los colombianos para construir la clase de Estado que necesitamos para el futuro, y nos asiste la confianza de que obtendremos el respaldo de los países amigos que le quieren hacer justicia al coraje y sacrificios que en los últimas décadas ha hecho nuestra nación. El plan no es, como se piensa en algunos círculos de opinión, una solución de fuerza contra el narcotráfico, es ante todo un plan social de construcción y fortalecimiento de las instituciones a lo largo y ancho del territorio nacional, enfocado especialmente en darle a los colombianos más pobres y necesitados más alternativas de solución a sus problemas.

Dentro del mismo hemos creado un Fondo de Emergencia Social, al que se destinarán 900 millones de dólares, para promover el empleo de mano de obra no capacitada mediante la construcción de obras de infraestructura que produzcan a su

vez beneficios comunitarios; para otorgar subsidios directos a las familias de menores recursos donde se garantice la salud y la educación de los niños, y para capacitar los jóvenes más pobres del país y abrirles mejores oportunidades de trabajo.

También el Plan Colombia, dentro de sus objetivos sociales, tiene previsto asignar más de 2.000 millones de dólares a una estrategia de Desarrollo Alternativo integral, que busca, más allá de la simple sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, promover un desarrollo regional en las zonas afectadas por la violencia o el narcotráfico, mediante obras de infraestructura física y social, así como prestando especial atención a la población víctima de la violencia en todas sus formas.

El Plan Colombia, al que hemos invitado a participar a la comunidad internacional, es un Plan social para la Colombia del siglo XXI: una Colombia en paz, con oportunidades de empleo para su gente, con unas instituciones fuertes y con una economía sólida, caminando el sendero del progreso y la justicia social y contando con la participación activa de la comunidad internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas.

¡Esa es la Colombia que estamos construyendo, con la voluntad y el coraje de todos los colombianos, con la decisión indeclinable de mi gobierno y con el apoyo solidario de muchos países amigos, como el Reino Unido!

Estimados amigas y amigos:

La historia de las naciones puede ser leída como la sucesión de períodos de auge y caída, de declives y renacimientos. Pero siempre ha sido la voluntad libre de los hombres la que ha logrado superar los derrumbamientos y construir la prosperidad, como nos los han enseñado mejor que nadie ustedes, los británicos.

Los colombianos hemos vivido el invierno de nuestras desventuras pero, y en esto no tengo la menor duda, estamos comenzando a vivir -como en este día- la primavera de nuestras esperanzas. Tenemos la capacidad para hacerlo. No somos un pueblo de violentos, mediocres o corruptos, como algunos con mucho simplismo nos quieren rotular. Somos, por el contrario, un pueblo que lucha contra muchas adversidades

y que empiece a recuperar la confianza en lo mejor de sus valores y capacidades para seguir adelante.

Alberto Lleras Camargo, uno de nuestros más grandes estadistas y arquitecto de la Colombia civilista y democrática del siglo XX, escribió alguna vez en la plácida cima de su ancianidad: *“Ninguna cosa peor para las gentes que acostumbrarse a oír las profecías más aterradoras y los anuncios más devastadores, señalados como los azotes por las maldades de un pueblo. No hay ciertamente pueblos malos. Hay momentos de corrupción y de dolo, de crimen y de impunidad en toda la historia, seguidos por una reacción salvadora y aún por excesos de puritanismo. Sólo con mantener abiertas las vías para que la libertad opere los cambios, sin empleo de la fuerza ni del despotismo, la humanidad puede seguir su camino de ascenso, empeñosamente, y cada época será mejor que la que le antecedió. Sólo que hay que perseverar, que hay que emplearse, que no se puede dar nadie por derrotado de antemano”*.

¡Los invito a acompañar a Colombia en este compromiso con la esperanza y el porvenir!

Muchas gracias